

Análisis de las controversias de las consultas libres e informadas en Michoacán, el caso de Jaracuaro

Verónica Marlene Correa Flores

Doctora en Ciencias Sociales

Profesora Investigadora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

Correo: veronica.correa@uiim.edu.mx

Abstrac

A partir reconocimiento de la protección constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas, se ha dado paso a nuevas fases en en el reconocimiento de derechos, misma que ha permitido a las comunidades indígenas recurrir a las diferentes instancias jurídicas para su reconocimiento. Para la región purépecha de Michoacán, materializar otras formas de acceso a la participación política, que en algunos casos más allá de los partidos políticos como es el acceso a ejercer el presupuesto directo, ha tenido diferentes vías, que van desde acuerdos políticos, procesos judiciales o la consulta libre e informada para acceder a través de la Ley Orgánica Municipal al presupuesto.

INTRODUCCIÓN

1. Las formas de obtener la autonomía de las comunidades

El aumento de las demandas indígenas, así como el reconocimiento internacional de los derechos indígenas durante la década de los noventa y la primera década del siglo XXI derivó en que diversos gobiernos latinoamericanos aprobaron leyes específicas que les han permitido elegir a sus autoridades bajo sus sistemas normativos internos, además de administrar la justicia de acuerdo con sus valores, de usar sus instituciones políticas para administrar sus tierras y recursos (Torres-Wong 2023). Sin embargo, el hecho de que diversos gobiernos adoptaran el reconocimiento de gobierno multiculturales, no vino acompañado de recursos necesarios, ni de regulaciones para la implementación de esos derechos.

Ante este escenario, en los últimos años ha sido común ver que la lucha por los procesos de autonomía y autogobierno se han utilizado estrategias político-jurídicas para la resolución de las demandas a través de un proceso de corte judicial

De acuerdo con Orlando Aragón, uno de los principales desafíos para conocer el actual alcance del derecho al autogobierno indígena en México es que la ruta no está basada en el estudio convencional de las leyes, y señala que fuera del artículo 2º constitucional, hay pocas normas que desarrollen en el desarrollo interno del Estado Mexicano el alcance de este derecho, y que la excepción son algunos códigos electorales que han puesto especial acento en los derechos políticos electorales (Aragón, 2021:70).

En ese mismo tenor, María del Carmen Ventura (2021) señala que a partir reconocimiento de la protección constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se ha dado paso a una nueva fase en el reconocimiento de derechos, misma que ha permitido a las comunidades indígenas el poder recurrir a las instancias judiciales para exigir el cumplimiento de esos derechos, y en ese sentido es notable como diversas comunidades de Michoacán han asumido desde la vía judicial una ruta que les permite materializar otra forma acceso a la participación política, en algunos casos más allá de los partidos políticos

Las exigencias de los pueblos indígenas tienen como eje las demanda el “derecho a la libre determinación como expresión de autonomía para crear un régimen de gobierno que corresponda a sus particularidades culturales, históricas, económicas y políticas” (López 2006). En respuesta a ello la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 ha permitido que se establezcan algunas condiciones para asegurar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, autonomía y autogobierno, pero está carece de una articulación.

La demanda por ejercer el presupuesto directo ha sido un campo fértil en Michoacán, sobre todo en la región denominada como la Meseta Purhépecha, en donde el Consejo Supremo

Indígena¹ tuvo un papel importante como articulador de las demandas de las comunidades indígenas, en donde el presupuesto directo se convirtió una parte fundamental de la agenda política de esta organización.

La apuesta por el autogobierno se ha extendido al ámbito submunicipal, en las jefaturas de tenencia, por lo que hasta enero de 2024 suman 38 comunidades que optaron por ejercer el presupuesto directo, esta decisión conlleva que las comunidades serán quienes ejercen las funciones de gobierno, tomando total control de los recursos.

2. La ley LOM

Para entender como es que se ha extendido esta condición en Michoacán es importante remontarse al año 2011 cuando mujeres impulsaron un movimiento para hacer frente a los talamontes y crimen organizado que saqueaban los recursos maderables. A partir de estos detonantes, le siguió un largo proceso de resistencia en donde la comunidad se negó a participar en las elecciones ni tampoco permitir partidos políticos tradicionales y ejercer su gobierno a través de una asamblea comunal regida por usos y costumbres.

La propuesta del municipio de Cherán K'eri para regirse por un gobierno de usos y costumbre fue en principio rechazada por el Instituto Electoral de Michoacán bajo el argumento de que, aunque este derecho podría derivarse de lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales, el IEM era un órgano de “legalidad”, por lo que estaba obligado a aplicar únicamente su normativa inmediata que era el Código Electoral de Michoacán. Esta negativa terminó resolviendo a través de un proceso judicial en donde finalmente se reconoció la demanda por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Aragón 2023).

Cabe señalar que, el papel asumido por el TEPJF ha sido de completo compromiso con los tratados internacionales, en ese sentido es notable el avance. En ese sentido, es emblemático

¹ El Consejo Supremo Indígena es un frente que agrupa a una serie de autoridades civiles y agrarias, así como algunos consejos comunales, se declaran independientes de los partidos políticos y han sido un actor clave en encabezar algunos litigios y procesos judiciales, además de encabezar acciones de presión política a través de cierre de carreteras y toma de instituciones gubernamentales.

la sentencia SUP-JDC-9167/2011, que sentó las bases del reconocimiento a la autonomía a un municipio, que en este caso fue el municipio de San Francisco Cherán.

Otro suceso importante se presentó en el año 2015 cuando la comunidad de San Francisco Pichataro solicitó al municipio del municipio de Tingambato Michoacán, que como parte de sus derechos a la autodeterminación se transfirieron los recursos que le corresponden respecto de los que el municipio recibe por parte de la Federación, de los ramos 28 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para ser administrados por la autoridad comunitaria electa de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.

Ante la negativa del ayuntamiento de Tingambato de otorgar la transferencia directa, la población buscó que a través del reconocimiento de los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno se llevara ante el la Sala Superior del TEPJF para su revisión. La Sala Superior retomó en la Sentencia SUP-JDC-1865/2015 la interpretación amplia que se hace en la Observación general No. 25 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas relativo a la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto. La Sala Superior vinculó el derecho de la ciudadanía a: Participar en la dirección de los asuntos públicos con el derecho a la participación política efectiva.

Además, se reconoció que el derecho al autogobierno no sólo es de índole cultural, sino también político, y no se limita únicamente al nombramiento de autoridades tradicionales por la vía de los usos y costumbres, sino que también tiene una dimensión económica que no se puede separar de las demás, pues “sólo por medio del acceso justo y equitativo a los recursos públicos que les correspondía era posible la subsistencia de sus formas tradicionales de organización” (López, 2019, 181).

Fue entonces que la Sala Superior del TEPJF reconoció el derecho de la comunidad purhépecha de Pichátaro, tenencia del municipio de Tingambato, a ejercer su autogobierno mediante la administración directa de una parte proporcional del presupuesto municipal. Las consecuencias de esta sentencia abrieron la puerta, primero a que otras comunidades buscarán a través de la vía judicial el reconocimiento para el autogobierno, fue así que las comunidades

de Santa Fe de la Laguna, Santa María Sevina, Arantepacua y San Felipe de los Herreros buscaron esa vía.

Ley Orgánica Municipal y el IEEM

El reconocimiento de autonomía de Cherán sembró un antecedente y referente legal en materia de Derecho Indígena (Aragón, 2021), sin embargo en la historia política de las comunidades originarias de Michoacán hay precedentes de una lucha por configurar gobiernos indígenas independientes de los partidos políticos, como es el caso de Nurío en el municipio de Paracho, que desde 2005 consiguió tener acceso a presupuesto a través de un acuerdo con su ayuntamiento. (véase cuadro uno)

1. Comunidades que obtuvieron el presupuesto directo mediante un acuerdo político

Comunidades	Municipio	Año
Santa Cruz Tanaco	Cheherán	1
Comachuen	Nahuatzen	2
Cherán Atzicurin	Paracho	3
Tarecuato	Tangamandapio	4
Tomedán	Taretán	5
Pomacuarán	Paracho	6
Ahuirán	Paracho	7
Quinceo	Paracho	8

Fuente: elaboración propia con información del IEM

La relevancia del caso michoacano, es poder revisar como la ausencia de trabajo legislativo (Aragón, 2021), las comunidades originarias de la meseta Purhepecha han incursionado en la apropiación del lenguaje jurídico y de derechos, que tal como menciona María del Carmen Ventura (2020), les ha permitido avanzar en sus propios proyectos políticos.

Aprovechando el contexto de procesos emancipatorios como el de Cherán y de San Francisco Pichataro algunas comunidades vecinas como San Felipe de los Herreros, Arantepacua buscaron a través de procesos jurídicos obtener su presupuesto. De acuerdo con Orlando Aragón, el intercambio de experiencias entre el Concejo Mayor de Cherán K’eri y con un grupo de abogados autodenominados como Colectivo Emancipaciones.

Los principales objetivos de esta articulación entre comunidades autónomas fueron, entre otros, promover el cambio hacia la autonomía y el autogobierno indígenas en diversas comunidades hermanas, difundir la vía judicial que se había conseguido abrir para que las comunidades optaron por el presupuesto directo. (Aragón 2023)

2. Comunidades que obtuvieron el presupuesto directo a través de un proceso judicial

Comunidades	Municipio	Año
Santa María Sevina	Nahuatzen	1
San Francisco Pichataro	Tingambato	2
Santa Fe de la Laguna	Quiroga	3
Arantepacua	Nahuatzen	4
San Felipe de los Herreros	Charapan	5

Fuente: elaboración propia con información del IEM

Estos procesos judiciales hacia una nueva consideración intercultural por parte del TEPJF sentaron las bases para la ampliación de los alcances del derecho al autogobierno, ahora dotando a las comunidades con calidad político-administrativa de tenencia y encargados del orden del derecho a ejercer y administrar un recurso público.

De acuerdo con la narración del propio Orlando Aragón, abogado y representante del Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas (Facci), el contexto en el que se discutió el juicio promovido por los concejos de Pichátaro, San Felipe de los Herreros y Arantepacua, estuvo acompañado de diversos reveses entre el TEPJF y la SCJN sobre los temas en relación al tema de los derechos y autonomía frente a la figura legal del

Ayuntamiento y por una serie de conflictos intracomunitarios como fue en el caso de Nahuatzen, Sevina y Comachuén.

Estos conflictos derivaron en la conformación de un Frente por la autonomía FACCI², que aprovechando el momento en el que el entonces legislador y actual gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla se encontraba impulsando la reforma a la Ley Orgánica Municipal, concretaron una serie de acuerdos con el entonces legislador en la que promovieron que la LOOM se armonizara con lo establecido por las sentencias y con lo establecido en el artículo 2 de la CPEUM para garantizar los derechos de autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas.

Nuevamente Orlando Aragón narra que a través de los acuerdos logrados con el entonces legislador Alfredo Ramírez Bedolla se logró una alianza que permitió que el 30 de marzo de 2021 quedara publicada una Ley Orgánica Municipal, en donde se reconoce que las comunidades indígenas que no sean cabeceras municipales tienen el derecho a administrar de forma directa la parte proporcional del presupuesto público. Al impulsar esta reforma, se esperaba armonizar la legislación local con lo dispuesto en las resoluciones judiciales (Gobierno de Michoacán 2022).

Ya como gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha asumido especial interés por impulsar en su agenda política el impulsar que un mayor número de comunidades originarias ejerzan con base en su determinación la opción de su autogobierno, es así que en enero de 2022 presentó un Protocolo para la Transición de Comunidades indígenas al Autogobierno.

Dicho protocolo establece las bases para que las comunidades a través de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal puedan acceder a la administración del presupuesto directo. El protocolo establece que sea a través del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que se atiendan las consultas y asambleas de las comunidades para determinar si inician con el autogobierno y ejercen el presupuesto directo.

² El FACCI tuvo su origen en Cherán Keri entre los años 2015 y 2018, sus principales objetivos era articular a las diferentes comunidades y promover el cambio hacia la autonomía y el autogobierno indígena en las diversas comunidades, difundir la vía judicial para la obtención del presupuesto directo. (Aragón: 2023, 167).

3. Fases para acceder al ejercicio de autogobierno indígena y la administración del presupuesto directo

Requisitos para convertirse en una Tenencia Indígena	Proceso para la celebración de la consulta	Consulta	Momentos posteriores a la consulta
<p>Tener carácter de Tenencia (Art. 116 LOM)</p> <p>Estar prevista en el Catálogo de Pueblos y comunidades indígenas del IMPI</p> <p>(Art. 116 LOM)</p>	<p>Presentación de solicitud por parte de la comunidad indígena ante el IEM</p> <p>Estudio de la solicitud por parte del IEM</p> <p>Trabajos preparativos de la consulta</p>	<p>Consulta</p> <p>Calificación de la consulta por parte del IEM</p> <p>Fase informativa</p>	<p>Acuerdo de cabildo</p> <p>Notificación a la Secretaría de Finanzas y Administración de la respuesta</p> <p>Constancia INPI y tramite ante SAT</p> <p>Apertura de cuentas</p> <p>Depósito a la Comunidad</p> <p>Fiscalización/ ASE</p>

Fuente: elaboración propia con información del IEM

Como ya se ha mencionado, la presente administración del gobierno estatal de Michoacán ha impulsado como parte de la agenda política del actual gobernador extender en las comunidades el acceso a ese derecho, en diversos medios de comunicación el gobernador destacó que desde 2021 a la fecha se ha incrementado el acceso al autogobierno, tras la reforma a la legislación, por lo que “la meta de este año es lograr que otras siete comunidades transiten al autogobierno para alcanzar un registro de 45 localidades regidas bajo este sistema”. (véase cuadro 4)

Resalta dicha declaración, pues resalta que el uno de los propósitos del actual gobierno es en propiciar estos cambios administrativos lo cual se hace patente cuando en la misma declaración explica que es “A través de la secretaría de gobierno quien acompaña y respalda

a las comunidades indígenas que deciden transitar al autogobierno y ejercen el presupuesto directo”.

4. Comunidades que obtuvieron el presupuesto directo de acuerdo al procedimiento de la Ley Orgánica Municipal.

AÑO	COMUNIDAD	MUNICIPIO
2021	San Ángel Zurumucapio	Tangamandapio
2021	La Cantera	Tangamandapio
2021	Ocumicho	Charapan
2021	Jaracuaro	Erongaricuaro
2021	Turicuaro	Nahuatzen
2021	Angahuan	Uruapan
2021	Janitzio	Pátzcuaro
2021	Donaciano Ojeda	Zitacuaro
2021	Crescencio Morales	Zitacuaro
2022	Carapan	Chilchota
2022	Jesus Díaz Tsirio	Los Reyes
2022	Zacán	Los Reyes
2022	Nuevo Zirosto	Uruapan
2022	San Francisco de Peribán	Periban
2022	Santiago Azajo	Coeneo
2022	Sicuicho	Los Reyes
2023	San Matías el Grande	Hidalgo
2023	El Coire	Aguila
2023	San Cristóbal	Ocampo
2023	San Bartolo Cuitareo	Hidalgo
2023	Pamatácuaro	Reyes
2023	San Isidro	Reyes
2023	Carpinteros	Zitacuaro
2023	Tecuna	Pátzcuaro

Fuente: elaboración propia con información del IEM

A partir de estas declaraciones del gobernador y después de observar este aumento paulatino de comunidades aspirando al presupuesto directo es que surge la siguiente pregunta ¿El protocolo para acceder al presupuesto directo puede ser considerado una política pública construida e impulsada desde el gobierno con un fin político?. Esta pregunta representa un desafío, pues de primera mano es difícil dilucidar hasta dónde está el trabajo de acompañamiento jurídico por parte de colectivos y agrupaciones pro derecho de las

comunidades y qué tanto se sirve del aprovechamiento de un sector de la política o de un partido como una agenda gubernamental propia, para entender ello, es importante situarse en los discursos, tanto el del gobierno estatal, como del colectivo Emancipaciones.

De acuerdo con Orlando Aragón miembro del colectivo emancipadores, y asesor de los Consejos Comunitarios que integran el FACCI, en su artículo “La caja negra del reconocimiento al autogobierno indígena en la Nueva ley orgánica municipal” explica que la propuesta de reforma de la LOMM fue un proceso de diálogo por parte de los diferentes consejos comunales quienes hicieron una propuesta del articulado que sería presentada al diputado Ramíres Bedolla; por lo que la aprobación de la LOMM “es una muestra elocuente de que las comunidades purépechas de Michoacán han jugado en el avance de sus derechos”, que visto desde la perspectiva de la cultura política nos da una pauta para entender que existe un consenso de los valores democráticos y que se traduce en el continuo uso de instituciones democráticas como es la vía judicial electoral para la resolución de las demandas.

Por otra parte, si consideramos algunos aspectos sobre la continua difusión gubernamental sobre el número de las comunidades sumadas a la administración de recursos como medio de organización comunal e incluso la forma en la que se han articulado desde la Secretaría de Gobierno del Estado, todo parece indicar que se trata de un proceso muy bien pensado por parte del gobierno actual como un medio de promoción política.

3. El desarrollo y resultado de las consultas

A partir del apartado anterior en donde se revisó la puesta en marcha de la LOMM y las particularidades de su negociación con el Frente por la autonomía FACCI para que la reforma contemplara una armonización legal con el derecho al autogobierno de las comunidades y el papel de impulsor del actual gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, es que han surgido las siguientes preguntas ¿Cuál ha sido la experiencia de las comunidades en respuesta a la consulta informada?, ¿Las consultas se han ejecutado de forma libre o han tenido obstáculos?

Como ya se ha mencionado, el protocolo del gobierno para la Transición de comunidades al autogobierno indígena y la administración directa establece que sea a través del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que se atiendan las consultas y asambleas de las comunidades para determinar si inician con el autogobierno y ejercen el presupuesto directo.

Promover la participación política a través de diversos medios ha sido uno de los retos más importantes de las democracias contemporáneas, y éste ejercicio no está exento de una serie de conflictos al ejecutarse algunas políticas que lo promueven, pues los diseños institucionales no han logrado resolver los retos que se enfrentan producto de los grandes cambios que están ligados a la descentralización y globalización del poder, así como la tendencia de separación entre representantes y representados que se encuentra en cuestiones a los patrones tradicionales (Singer 2021: 29).

De forma general los mecanismos de democracia directa (MDD) han sido adoptados en varias democracias; en los países latinoamericanos la incorporación de dichos mecanismos en los textos constitucionales parece asociarse a la crisis de representación política de algunos sectores de la sociedad que estaban excluidos, al bajo nivel de popularidad de los partidos políticos y los congresos, así como al bajo nivel de participación electoral. Pero también podría explicarse por otras causas, incluso por una tendencia o moda en la hechura de las constituciones (véase Gabriel Negretto 2015).

En contextos multiculturales y tras las demandas de los pueblos indígenas, que se materializaron en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad Cultural es que los MDD se han convertido en una institución que permite la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre algunos temas de la agenda pública. Estos espacios promueven la deliberación. Sin embargo, como todo ejercicio político tiene sus particularidades,

Desde la ciencia política se ha construido un nuevo nicho de investigación que analiza los Mecanismos de Democracia Directa y sus repercusiones en el desarrollo de sociedades democráticas a partir de las dinámicas en las que se implementan. Al respecto David Altman

señala que mientras en las democracias consolidadas los plebiscitos responden a quien desea ahorrarse una decisión costosa, en regímenes semi democráticos, “sirven para esquivar los pesos y contrapesos clásicos, generalmente otros poderes ‘*molestos*’, como los parlamentos o el poder judicial (Altman 2016: SP).

Por su parte Yannina Welp sugiere que se puede reconocer y analizar a los MDD desde el origen y la activación de la consulta, si estos surgen desde arriba por parte de autoridades gubernamentales o si se activan desde abajo, por parte de la sociedad civil, grupos u organizaciones. Alicia Lissidini además distingue sobre si estos MDD impulsados desde la ciudadanía son mecanismos proactivos, como son las iniciativas de ley o iniciativas de consulta popular o si son reactivos como puede ser la revocación de mandato o la derogación de una ley.

Y también dentro de ese espectro de mecanismos de democracia directa se encuentran los mecanismos obligatorios, como es la consulta obligada previa a las poblaciones indígenas. Este mecanismo tiene como origen el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT que estableció un compromiso con los Estados firmantes sobre la obligación de consultar a los pueblos sobre todas aquellas medidas que afecten directamente a los pueblos. La Consulta previa tiene como características ser libre, previa, informada y de buena fe (Artículo 6, Convenio 169, OIT).

Acorde a lo establecido por la LOMM y como parte del el protocolo del gobierno para la Transición de comunidades al autogobierno indígena y la administración directa, se han llevado desde el año 2021 al 2023 veinticuatro consultas previas de acuerdo a la información presentada por el Instituto Electoral de Michoacán.

Respecto a las veinticuatro comunidades consultadas vale decir que el IEM reporta que la primera solicitud perteneciente a la comunidad de San Ángel Zorumucapio municipio de Ziracuaretiro Michoacán se presentó el 21 de abril de 2021 y con ella se inició la construcción de la ruta jurídica para su atención:

Lo que se hicimos entre la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto, la comunidad y el colectivo que les acompañaba jurídicamente, fueron necesarias ocho reuniones de trabajo, en las que poco a poco, reunión a reunión se construyó el protocolo que hasta la fecha ha sido utilizado en todas las consultas. Y está, marcó el inicio de una serie de solicitudes que fueron presentadas (IEM 2023)

De acuerdo con el artículo 117 de la LOMM, las comunidades que decidan hacer efectivo su derecho al autogobierno deberán cumplir con los requerimientos que señala la reglamentación municipal y estatal respectiva, y sobre las comunidades que solicitarán el ejercicio y administración directa de los recursos presupuestales, de la siguiente forma:

1. Las comunidades indígenas, vía sus representantes autorizados por las respectivas asambleas, deberán presentar una solicitud ante el Instituto electoral, ayuntamiento respectivo.
2. La solicitud deberá ser acompañada por el acta de asamblea y firmada por todas las autoridades comunales;
3. Una vez presentada la solicitud, el Instituto Electoral de Michoacán realizará en conjunto con el Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles, una consulta a la comunidad en la que se especifique si es deseo de la comunidad el elegir, gobernarse y administrarse de forma autónoma

A partir del recuento de las consultas organizadas por el IEM, es que se elaboró para este trabajo una base de datos sobre las personas consultadas, para poder tener algunos indicios de la respuesta por parte de las comunidades, al tener una revisión panorámica de las consultas es posible detectar cierto comportamiento de los ciudadanos que asistieron a las consultas y su respuesta a estos ejercicios de participación política.

En ese sentido es importante decir que hasta la fecha han sido consultadas 22 mil 444 ciudadanos en 24 ejercicios ciudadanos, de las cuales al menos 19 mil 388 personas votaron durante la consulta, esto quiere decir que al menos 3 mil personas no emitieron voto durante la consulta. Los casos en donde se registró un mayor número de abstención son en las

comunidades de Carapan, Pamatácuaro y san Isidro, en el municipio de los Reyes. (véase cuadro 5)

5. Resultados de las Consultas Previas para el acceso al presupuesto directo

AÑO	COMUNIDAD	MUNICIPIO	TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS	A FAVOR	EN CONTRA	VOTOS	ABSTENCIÓN
2021	San Ángel Zurumucapio	Tangamandapio	2,734	2734	0	2734	0
2021	La Cantera	Tangamandapio	1242	1123	116	1239	3
2021	Ocumicho	Charapan	427	322	41	363	64
2021	Jaracuaro	Erongaricuaro	1318	597	564	1161	157
2021	Turicuaro	Nahuatzen	1237	1230	7	1237	0
2021	Angahuan	Uruapan	1781	1688	0	1688	93
2021	Janitzio	Pátzcuaro	561	516	0	516	45
2021	Donaciano Ojeda	Zitacuaro	677	638	1	639	38
2021	Crescencio Morales	Zitacuaro	754	754	0	0	754
2022	Carapan	Chilchota	1257	789	0	789	468
2022	Jesus Díaz Tsirio	Los Reyes	1294	1237	0	1237	57
2022	Zacán	Los Reyes	431	323	2	325	106
2022	Nuevo Zirosto	Uruapan	290	210	0	210	80
2022	San Francisco de Peribán	Periban	831	819	2	821	10
2022	Santiago Azajo	Coeneo	243	105	102	207	36
2022	Sicuicho	Los Reyes	869	696	0	696	173
2023	San Matías el Grande	Hidalgo	877	532	134	666	211
2023	El Coire	Aquila	1535	1338	0	1338	197
2023	San Crítopal	Ocampo	763	629	38	667	96
2023	San Bartolo Cuitareo	Hidalgo	445	377	408	785	-340
2023	Pamatácuaro	Reyes	1529	1013	0	1013	516
2023	San Isidro	Reyes	780	530	0	530	250
2023	Carpinteros	Zitacuaro	407	391	0	391	16
2023	Tecuena	Pátzcuaro	142	136	0	136	6
TOTAL			22,424	17973	1415	19388	3,036

Fuente: elaboración propia con datos del IEM

Mientras que los niveles más altos de participación se han concentrado en las comunidades de San Ángel Zurumucapio, La Cantera del municipio de Tangamandapio y San Francisco de Periban, aunque de forma global, los niveles de participación rebasan el 60 por ciento en todas las comunidades donde se llevaron a cabo las consultas.

¿La LOOM como una transición tersa al presupuesto directo?

El número de consultas realizadas en el periodo de 2021 a 2024 pueden considerarse como un proceso de transición política pácifica en donde las comunidades que optaron por ejercer el presupuesto directo ven en el proceso del ejercicio del protocolo de la LOOM a través del Instituto Electoral de Michoacán una vía pácifica a diferencia de algunos otros procesos de transición como fue el caso de Santa Fe de la Laguna³ en donde la vía fue a través de un proceso judicial la resolución del conflicto y que escaló hasta el Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, los procesos de ejecución para el presupuesto directo no ha estado excentos

Los ejercicios de consulta en donde hubo mayor controversia y resultados más cerrados fue en la comunidad de Jarácuaro en donde la diferencia entre los que apoyaban el proceso de presupuesto directo y los que no fue de 30 votos. Por su parte la comunidad de Santiago Azajo, en donde los votos a favor sólo superaron con tres votos a la opción de en contra. Vale la pena destacar el caso de San Bartolo Cuitareo, la cual decidió por mayoría no autogobernarse y con ello, no administrar el presupuesto de manera directa

La mayor resistencia por parte de un gobierno municipal que ha buscado oponerse a los procesos de consulta para el presupuesto directo es el caso del municipio de Erongaricuaró, quien a través de su edil, Juan Calderón Castillejo buscó desacreditar la consulta llevada a cabo en Jaracuaro bajo el argumento de que “la consulta fue amañada, no estoy en contra de

³ El proceso de reconocimiento al ejercicio del presupuesto directo por parte de la comunidad de Santa Fe de la Laguna inició un proceso para obtener los recursos públicos correspondientes como parte de la submunicipalidad del Municipio de Quiroga, al no obtener los resultados deseados, y teniendo en cuenta el caso de San Francisco Pichátaro, la asamblea comunitaria optó por acudir a las instancias judiciales mediante un JDC (Juicio para la protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano) en contra del Ayuntamiento de Quiroga, este proceso fue en principio resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), sin embargo, las condiciones impuestas por el TEEM fueron impugnadas por la propia comunidad por lo que acudieron a Sala Superior del TEPJF, quien resolvió siguiendo el mismo criterio que en el caso Pichátaro, a través de una consulta organizada por las autoridades de la comunidad, sin embargo, la consulta fue suspendida después de que el Ayuntamiento de Quiroga impulsó una controversia constitucional

la entrega del presupuesto, pero que hagan bien las cosas, porque la mayoría de la población no está de acuerdo” (La Voz de Michoacán 19 de diciembre de 2021).

Ante este escenario, el presidente municipal de Erongaricuaró Juan Calderón Castillejo demandó al Congreso del Estado, al Gobierno de Michoacán y al Instituto Electoral de Michoacán, con la que pretendía invalidar la Ley Orgánica Municipal, así como la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, con lo que las comunidades originarias del estado ya no podrían acceder a los procedimientos de consulta para la entrega del presupuesto directo y a su autonomía”.

Cabe señalar que cuando se trató de consultar sobre el presupuesto directo para la la comunidad de Santiago Uricho, también perteneciente al municipio de Erongaricuaró, el edil Juan Calderón Castillejo nuevamente se opuso a la celebración de la misma, a través de cierres y amenazas impidió la consulta programada en el mes de enero de 2023, ante la presencia de grupos de choque, por lo que se pospuso para el día 4 de junio de 2023 en donde se volvió a suspender bajo amenazas, por lo que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusó al edil de entorpecer el proceso.

A manera conclusión

El rumbo que han tomado las comunidades indígenas de Michoacán por consolidar nuevas formas de organización política ha tenido diversas fases, la primera consistió en buscar a través de las demandas de emancipación buscar procesos autonómicos o de autogobierno valiéndose del recurso de los tribunales como vía para lograrlo.

En ese sentido, como ya se ha relatado, existe una serie de organizaciones como el Colectivo Emancipaciones, que son un grupo de abogados que han acompañado los procesos autonómicos y también se han vinculado con organizaciones como el Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas (Facci), de igual forma el Consejo Supremo Indígena es otra de esas organizaciones que ha servido de apoyo a las comunidades para la defensa de los procesos autonómicos.

En una segunda etapa, hemos visto como se ha logrado transitar a una nueva etapa en la que organizaciones, comunidades y políticos, como es el actual gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla colocaron en la agenda política la necesidad de ordenamiento legal el proceso de autogobierno y de asignación del presupuesto a partir de generar una nueva Ley de Organización Municipal que armonice con las sentencias emitidas por el TEPJF para los casos de Cherán y San Francisco Pichataro.

Este proceso de negociación que el propio colectivo de Emancipaciones lo relaciona con el proceso de la Caja Negra, aludiendo al concepto de sistema político de David Easton, refleja una nueva fase de negociaciones entre la clase política y los grupos y organizaciones indígenas de Michoacán. Este proceso de impulsar demandas e insumos para el proceso político refleja ese interés por propiciar cambios importantes en la estructura institucional y el traslado de nuevas reglas, lo que da indicios de que las comunidades se han apropiado de los mecanismos democráticos para su lucha, sin embargo, aún existen resistencias políticas por parte de diversos autores.

Finalmente los procesos de consulta pueden ser vistos como una manifestación de un proceso político que llevó a las comunidades a dejar de manifiesto su sentir y ha legitimado estos procesos de cambio. Como todo proceso político hay algunos claroscuros que es importante destacar y que tienen que ver con el papel que juega el gobierno del estado de Michoacán al impulsar el proceso de asignación de presupuesto tal como si se tratara de un programa gubernamental y de alguna forma dejando de soslayo la lucha de las comunidades, lo cual quizá pueda resultar en un problema a corto o mediano plazo cuando sean las comunidades quienes se enfrenten en esta relación directa como cuarto nivel de gobierno o frente alguna presión política por parte del actual gobierno.

Bibliografía

Altman, David. (2010). Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de control político o políticamente controlado? *Perfiles latinoamericanos* 35, enero-julio 2010

Aragón, Orlando (2021) El laberinto del derecho. Legalidad estatal, esquizofrenia legal y lucha por el autogobierno indígena en México, 2021, Abya Yala Revista sobre Acceso á Justiça e Direitos nas América.

_____ (2021) Los paisajes del autogobierno indígena en Michoacán. Luchas, experiencias y paradojas y desafíos.

_____ (2022) La 'caja negra' del reconocimiento al autogobierno indígena en la nueva Ley Orgánica Municipal de Michoacán. El Frente por la autonomía, el presupuesto directo y la "faena jurídica". Revista Nueva Antropología. Vol. 35 Núm. 96.

De la Mata, Pizaña Felipe, Mara Gómez Pérez y Loza Otero Nicolás (2019), Justicia electoral y derechos humanos.

Instituto Electoral de Michoacán (2023) Estudio de las consultas libres e informadas 2021-2023.

Mair P y Katz R (2007) "La supremacía del partido en las instituciones públicas: el cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas en Montero, J, Gunther, Y Linz J (eds): Partidos políticos Viejos conceptos y nuevos retos . Madrid Trotta.

Norris, Pippa (2014), Why electoral integrity matters, Nueva York: Cambridge University Press

Organización Internacional del Trabajo. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. OIT. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

Peschard Jaqueline (2020), La cultura política democrática, Cuadernillo número 2 del Instituto Nacional Electoral

Singer Martha (2021) Representación y participación política indígena en México, Instituto Nacional Electoral, Universidad Autónoma de México.

Tello Alejandra (2023), Las sentencias clave de la justicia electoral inclusiva, 2016-2021, Tribunal Electoral del Poder Judicial. México

Torres Wong Marcela (2023) The Indigenous Right to Self-Determination in Extractives Economies.

Vázquez Correa (2020) Representación política y acciones afirmativas indígenas: la agenda pendiente, en Mirada Legislativa 192, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República VXIV Legislatura.

Ventura Patiño María del Carmen (2021), Desafíos de los gobiernos comunales en Michoacán. Presupuestos directos en la era de la judicialización de los derechos indígenas en México, Revista Nuestra América, vol. 9,

Welp, Yanina (2020), "La agenda de investigación" y "Apuntes para una reforma urgente", en Tuesta, Fernando y Yanina Welp (coords.), El Diablo está en los

detalles. Referéndum y poder político en América Latina. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Leyes y Resoluciones

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (CPEUM, 2020). Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, texto vigente última reforma publicada el 13 de abril de 2020, Cámara de Diputados, México.

SUP-RAP-726/2017 y Acumulados. (2017). Sentencia, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.